



Nadia Alderete

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata

Los movimientos campesinos frente a la dominación y concentración del poder en Paraguay*

Fecha de recepción: 15 de marzo de 2015

Fecha de aprobación: 18 de mayo de 2015

Resumen: El movimiento campesino es un actor histórico y clave en el Paraguay, por su lucha y resistencia frente a la desigualdad e injusticia que caracterizan desde siempre al país. Con la destitución de Fernando Lugo en un juicio por demás arbitrario, asume nuevamente el Partido Colorado de la mano de Horacio Cartes. En este nuevo contexto atravesado por las políticas neoliberales implementadas al inicio del nuevo gobierno y la conflictividad social que fue alimentando, las organizaciones campesinas ensayan nuevas estrategias, como la reconstitución del Congreso Democrático del Pueblo. Partiendo de este escenario, se intentará analizar qué incidencia tienen las organizaciones campesinas en la actual configuración de las relaciones de poder del Paraguay.

Palabras claves: concentración de la tierra – agronegocios – movimiento campesino – Congreso Democrático del Pueblo.

Abstract: The peasant motion is a historical factor in Paraguay. For their fight and resistance tackle inequality and injustice that has always characterized the country. With the dismissal of Fernando Lugo on trial by others arbitrary, assumes again the Colorado party

* Este trabajo se realizó en el marco de la Maestría en Historia Contemporánea. Allí llevo adelante mi tesis sobre el stonismo denominada, «Cumpleaños y política: una forma de legitimación del régimen», dirigida por la Dra. Lorena Soler.

Nadia Alderete

Estudiante avanzada de la carrera de Licenciatura de Sociología, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata. Buenos Aires. Argentina. Integrante CHIPA. Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos Aires. Argentina. nadiaalderete@yahoo.com.ar

© Nadia Alderete. Publicado en Revista Novapolis. Nº 8, Abr 2015, pp. 57-70. Asunción: Arandurã Editorial. ISSN 2077-5172.

to power of Horacio Cartes. In this new context crossed by the neoliberal policies implemented at the beginning of the new government and the social conflicts that this government was feeding, the peasant organizations test new strategies where the reconstitution of the Democratic People's Congress plays an important role. Starting from this scenario, trying to analyze what incidence have the peasant organizations in the current configuration of power relationships.

Keywords: land accumulation – agrobusiness – farmer organizations – Democratic People's Congress.



Introducción

Paraguay está caracterizado por ser un país altamente desigual, donde la posesión o no de la tierra tiene gran influencia en la estructuración de las relaciones de dominación. Frente a estas condiciones, los movimientos campesinos han resistido históricamente. En el 2008 con Fernando Lugo en la presidencia, se presentó la posibilidad de que los movimientos campesinos tuvieran mayor visibilidad. Sin embargo, este gobierno fue interrumpido por medio de un juicio político al presidente, luego de la masacre ocurrida en Curuguaty que dejó doce campesinos muertos. Con el actual gobierno de Horacio Cartes, las políticas neoliberales están a la orden del día, el avance de los agronegocios es más intenso y la conflictividad social adquiere mayor presencia.

Este trabajo, en el marco del desarrollo de la tesina de la carrera de Licenciatura en Sociología de la Universidad de La Plata (Argentina), intentará comenzar a evaluar la incidencia que tienen las organizaciones campesinas en la actual configuración de las relaciones de poder. Para ello, comienza con una descripción de la estructura económica del país y de la situación de las familias rurales frente al modelo de los agronegocios, continúa con un desarrollo histórico del movimiento campesino junto a una descripción de las principales organizaciones, para finalizar en los años más recientes con la asunción y destitución de Fernando Lugo y la vuelta del Partido Colorado al poder. Para concluir, se desarrollan posibles hipótesis o perspectivas de futuro.

Estructura económica agraria del Paraguay: concentración de la tierra y expulsión campesina

Paraguay es uno de los países más desiguales y con la más alta concentración de la tierra en América Latina. También posee una alta proporción

de población campesina, el 43% del total. Según la Encuesta Integrada de Hogares del 2002, el 29,7% de la población rural no posee tierras, el 60% de la población con menos tierras posee el 6,6% del total de las mismas y el 10% con más tierras posee el 66% del total (CODEHUPY, 2007).

El origen de la estructura latifundista en el Paraguay está asociado a la venta masiva de tierras públicas después de la guerra de la Triple Alianza (1870). En este periodo, la apropiación en manos de particulares adquirió un carácter masivo y extranjerizante, vendiéndose enormes áreas a capitales argentinos, brasileños, ingleses y, en menor medida, paraguayos.

Asimismo, durante la dictadura de Stroessner (1954-1989) se entregaron gran cantidad de hectáreas de tierra fiscal a civiles y militares, a pesar de estar destinadas a la reforma agraria y también se permitió la expansión de grandes productores brasileños. Por otro lado, el presidente impulsó el proceso de modernización agraria gracias al avance de la mecanización, es decir, la incorporación de modernas tecnologías y el uso intensivo de insumos agrícolas. Los grandes productores hicieron uso de estas ventajas y los pequeños propietarios se limitaron a sobrevivir y producir de manera cada vez menos competitiva, acelerándose el desarraigo de la población campesina.

Históricamente el monopolio de la tierra en manos de grandes empresas extractivas de capital extranjero, ha dificultado un desarrollo social y económicamente sustentable y ha expulsado y despojado a las comunidades campesinas e indígenas de forma masiva.

Actualmente, el sistema económico del Paraguay se sostiene principalmente por la producción y exportación agropecuaria. El 80% de las exportaciones se compone de cinco rubros primarios: fibra de algodón, soja en grano, aceites vegetales, carne y madera. Asimismo, una parte importante de la industria se basa en el procesamiento de estos productos.

El modelo agroexportador ha generado grandes beneficios a los sectores vinculados al mismo. Las empresas multinacionales controlan casi la totalidad de la provisión de insumos para la producción y las principales redes del comercio internacional de los rubros de exportación. Los latifundistas, que históricamente han tenido un lugar privilegiado, vieron aumentar su riqueza gracias a la valorización inmobiliaria de las tierras, producto de la expansión de la soja.

Pero este modelo también ha empeorado el nivel de vida de la población de las zonas rurales. Producto de la expansión de la agricultura capitalista, los pequeños productores y productoras son expulsados de sus tierras. Incluso la producción volcada al monocultivo prácticamente elimina la

diversificación productiva que sirve de sustento alimentario para toda la población. Este modelo va produciendo un empobrecimiento de la población campesina, disminuyendo la posibilidad de producirse a sí misma y de manera autónoma para pasar a depender de la economía capitalista para poder sobrevivir (Palau, 2003). Lo que se pone en riesgo aquí es la seguridad y soberanía alimentarias de campesinos y campesinas¹.

Diego Domínguez se refiere a esta problemática en términos de *agriculturas en tensión*, donde por un lado se presenta el avance de la agricultura transgénica y por el otro la resistencia de la agricultura campesina. «Lo que se encuentra de fondo es la lucha por el territorio. Lucha que significa, para los campesinos, la posibilidad de su reproducción individual y colectiva» (Domínguez, 2005:56).

Con el paso del tiempo, el proceso de minifundización se acelera. Si en ciertos períodos se observa un aumento en el número de explotaciones agrícolas, esto se corresponde con un reparto de tierras pero entre las pequeñas propiedades, es decir, que aumenta el número de minifundios y los latifundios permanecen intocables.

Por otro lado, el país se está quedando sin zonas boscosas y sin terrenos aptos para el cultivo. La explotación masiva de la tierra, la expansión del ganado y el avance de la sojización con el uso intensivo de los agrotóxicos erosionan cada vez más los suelos y promueven la deforestación, lo que lleva también a una contaminación y secamiento del agua.

La resistencia a través del tiempo

A comienzos de 1960 se forman las Ligas Agrarias Cristianas (LAC), que frente a la dictadura y la represión, abandonan su matiz religioso y pasan a tomar una forma más contestataria y de carácter reivindicativo, cuestionando la estructura injusta de la sociedad y demandando, entre otras cuestiones, una redistribución equitativa de la tierra. La represión generada por el gobierno de Stroessner (1954-1989), junto a la llamada marcha hacia el este (estrategia de colonización agrícola impulsada por el gobierno, que buscaba descomprimir la población de la zona central) y la creación de fuentes de trabajo provenientes de las obras hidroeléctricas y del sector de la construcción, provocaron una disminución de la lucha campesina y una desarticulación de las LAC. El acceso a la tierra se plantea como el problema central de las organizaciones, dando lugar a las ocupaciones, el

1 La «seguridad alimentaria» es entendida como el derecho de las personas al acceso a alimentos de calidad y cantidad suficientes; mientras que la «soberanía alimentaria» habla del derecho de los pueblos a definir su propia política alimentaria. Domínguez, 2005.

aumento de conflictos y las primeras movilizaciones de protesta masivas. Estas acciones son respondidas por el gobierno autoritario con fuertes represiones. Con la apertura democrática, el conflicto por la tierra se acenúa y el número de ocupaciones de latifundios y tierras malhabidas que estaban en propiedad de militares y políticos aumenta enormemente. Los grandes propietarios reaccionan conformando bandas parapoliciales y el Estado lo hace a través de medidas altamente represivas, dejando un saldo importante de asesinatos campesinos (CODEHUPY, 2007).

Varias son las organizaciones que logran asentarse durante el periodo democrático. En 1991 la Coordinación Nacional de Organizaciones Campesinas (CONAPA), fundada en 1985, pasa a denominarse Federación Nacional Campesina (FNC). La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) hace su aparición en el año 1994 aglutinando a una cantidad de organizaciones rurales e indígenas, las más importantes del país, incluida a la FNC. En el año 1998 se produce una ruptura y la FNC se separa de la MCNOC (CODEHUPY, 2007).

Siguiendo a M. Palau (2008), podemos decir que la MCNOC articula a organizaciones regionales y nacionales y sus reivindicaciones se han centrado en la implementación de proyectos productivos y reclamos relacionados con los ejes de salud, tierra y educación. Por su parte, la FNC se ha volcado en los últimos años hacia demandas vinculadas con la producción e industrialización del algodón.

En 1999 se conforma la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI). Adquiere un papel relevante principalmente a partir del año 2003, cuando demanda por el esclarecimiento de la muerte de un niño (Silvino Talavera, hijo de una dirigente de CONAMURI), producto de las fumigaciones con agrotóxicos. De esta manera logran que la problemática de la soja adquiera mayor importancia y concientización en la opinión pública. Esta cuestión no es vivida de manera aislada, sino que la organización la entiende como un problema que integra el modelo agroexportador.

En el año 2002, durante el gobierno de Luis González Macchi, se intenta llevar adelante una serie de medidas impulsadas por el FMI, como la privatización de empresas estatales, el intento de reforma de la banca pública y la aprobación de un proyecto de ley antiterrorista. Estas son frenadas gracias a la resistencia de un conjunto de organizaciones sociales y políticas que se nuclean bajo el Congreso Democrático del Pueblo. La mayoría de las organizaciones que participaban de este congreso se encontraban articulando en dos espacios: el Frente Nacional de Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional, conformado entre otras por la FNC,

la Organización de Trabajadores de la Educación, Central Nacional de Trabajadores y Cambio por la Liberación y la Plenaria Popular Permanente de la que participaba la MCNOC junto a otras organizaciones y partidos políticos (Palau M., 2002). Marielle Palau sostiene que en este periodo las organizaciones campesinas poseían ya un cúmulo de experiencias en la lucha y varias victorias reivindicativas obtenidas, además de la conciencia de la necesidad de unificar fuerzas para lograr la victoria frente al avance de las políticas privatizadoras.

A partir del año 2004 las organizaciones campesinas más importantes redireccionan sus reclamos hacia el modelo sojero agroexportador y el neoliberalismo, superando el análisis coyuntural e intentando centrarse en la discusión de un nuevo modelo de desarrollo de país (Palau M. y Kretschmer, 2004). Ese mismo año se produjeron grandes movilizaciones, ocupaciones de tierras y organizaciones sociales, campesinas, sindicales, de mujeres, indígenas y religiosas conforman el Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida para frenar el avance de la soja.

Perspectivas políticas del movimiento campesino

La sojización de los campos es un punto central en la agenda de los movimientos. El uso de agroquímicos afecta los suelos, el agua y la biodiversidad en general, así como a las poblaciones cercanas a los cultivos. La contaminación que provoca desplaza a las personas de los asentamientos campesinos y de sus lotes, muchas veces de manera intencionada por la compra de lotes cercanos a los territorios que desean obtener, desde donde rocían con agrotóxicos los terrenos lindantes (Palau y Kretschmer, 2004). Frente a esto el Estado no pone ninguna restricción, lo que provoca una gran desprotección frente al peligro de envenenamiento (Codehupy, 2007).

El reclamo por una reforma agraria integral, la resistencia contra el modelo agroexportador excluyente y las políticas neoliberales, así como la importancia de un modelo de desarrollo nacional también están presentes en la agenda de las principales organizaciones: «Para la FNC, la lucha por la tierra es una lucha por el desarrollo nacional y por la soberanía de nuestro país. Para la FNC, conquistar un pedazo de tierra significa «eñemopyrenda» (hacer pie) y pelear desde allí por la transformación de un Estado oligárquico y proimperialista»².

A esto debe sumarse el protagonismo que van adquiriendo las mujeres, ya sea dentro de sus organizaciones o al momento de conformar espacios políticos propios, como por ejemplo el partido político Kuñá Pyrendá

² Ver al respecto «Marchas Campesinas» <http://www.fnc.org.py/?page_id=190>.

(huella de mujer en guaraní), que se presentó en las últimas elecciones nacionales de 2013 y tiene como una de sus representantes a una dirigente de CONAMURI: Magiorina Balbuena.

Ramón Fogel (2006) analiza la concepción de democracia presente en las organizaciones campesinas y sostiene que conciben la ciudadanía a partir de ciertos derechos indispensables: el acceso a la tierra es el principal medio de goce de esos derechos. Frente a esto y ante la ausencia de políticas favorables a los campesinos y campesinas, las ocupaciones de tierras se presentan como una forma de hacer efectivo y reivindicar el derecho a la tierra. Así participan directamente en el proceso de asignación de derechos y toma de decisiones en conflictos que les competen.

Con el avance cada vez más inhumano del capitalismo sobre las zonas rurales, la concepción de ciudadanía en los movimientos se amplía y se incluyen tanto los derechos económicos, como los políticos y sociales. Esto va marcando la nueva definición de democracia que los campesinos y campesinas van construyendo con sus luchas. En este enfoque, «el retorno a la democracia implica la recuperación de la autonomía para formular políticas, la repolitización de la economía y la renacionalización de la política» (Fogel, 2006:104).

Ida y vuelta del Partido Colorado. De Lugo a Cartes

En el 2008 Fernando Lugo derrotó al Partido Colorado, que permanecía en el poder desde hacía 61 años. Bajo la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) se agruparon pequeñas agrupaciones de izquierda, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), organizaciones del campo popular y organizaciones campesinas que no tuvieron una postura unificada. Entre quienes sí apoyaron la candidatura de Lugo se encontraban la MCNOC, CONAMURI, ONAC (Organización Nacional Campesina), así como dirigentes que formaron parte de las listas electorales a pesar de que su organización no acompañaba la alianza. La FNC llamó al voto protesta (voto en blanco o nulo), posición política adoptada desde años anteriores que intenta cuestionar la práctica electoral como única forma de participación política. Otros movimientos populares apoyaron la candidatura de Lugo pero no formaron parte de la Alianza, porque no estaban de acuerdo en compartir un espacio con sectores que habían aprobado leyes y políticas contra los sectores populares (Palau, M., 2008).

Los movimientos sociales y políticos en general tenían la expectativa de que se cumplieran ciertas demandas como la disminución de la corrupción e impunidad, la recuperación de la soberanía energética, la reforma del

Estado y la reactivación económica. Las organizaciones campesinas en particular planteaban como demandas urgentes la reforma agraria integral, el catastro nacional, políticas productivas y la soberanía alimentaria entre otras.

El Estado, por su parte, estaba comenzando tíbiamente a asumir otro rol, principalmente a través del fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo de programas sociales. Había más técnicos y técnicas en los ministerios, se realizaban concursos para el ingreso de funcionarios, el área social tenía otra participación en las políticas públicas, una atención asistencial a la tercera edad y a las poblaciones más vulnerables, etc.

Una cuestión interesante de este período, tal vez sea «el proceso de concientización social» que se profundizó durante su gobierno, mediante el cual algunos sectores sociales comenzaron a incorporarse a «lo político», una especie de «politización» creciente en algunas capas que habían sido excluidas o se habían replegado con un discurso apolítico o anticorrupción, no puede ni debe ser atribuido al luguismo y mucho menos a la figura de Lugo. Tiene que comprenderse en términos de reorganización de los movimientos sociales y de las expectativas de cambio» (López, 2014:132).

El 15 de junio de 2012 unas tierras en litigio conocidas como Marina Kue fueron testigos de una matanza que dejó 17 víctimas (11 campesinos y 6 policías), en medio de un desalojo de las fuerzas policiales. Estas tierras se encontraban ocupadas desde hacía aproximadamente un mes por campesinos y campesinas que pertenecían al Movimiento de los Carperos³. Quien se atribuye la propiedad de las tierras es Blas Riquelme, ex senador del Partido Colorado y uno de los beneficiarios privilegiados de las miles de hectáreas de tierras fiscales que Alfredo Stroessner entregó durante su mandato. Testigos y varias investigaciones sostienen que el uso de la fuerza fue brutal y desproporcional comparado con la situación, donde incluso se reprimió y persiguió una vez que las tierras estuvieron bajo el control de la Policía. Se realizaron detenciones e imputaciones arbitrarias, sin ninguna prueba. Estas imputaciones no fueron levantadas, a pesar de comprobarse las irregularidades y falta de pruebas en los procesos. Hasta el día de hoy este suceso no fue esclarecido y los únicos procesados son campesinos (Boccia Paz, 2012).

3 Este movimiento surge hace unos años, durante el gobierno de Fernando Lugo. Campesinos y campesinas sin tierras que formaban parte de las comisiones vecinales, comenzaron a reunirse y discutir qué podía hacerse con el problema de la tierra. Desde la visión de sus propios integrantes el movimiento surge producto de la desilusión hacia las organizaciones campesinas tradicionales, que no querían presionar al gobierno de Lugo y por lo tanto no respaldaban sus demandas, y frente al mismo gobierno con el que se habían generado expectativas que no estaban siendo satisfechas.

Este hecho llevó a la realización de un juicio político en contra del presidente, bajo la acusación de «mal desempeño de sus funciones». El juicio fue sumamente rápido, el acusado tuvo solo dos horas para preparar su defensa frente a una acusación que carecía de pruebas, pero que sostenía que los hechos eran de público conocimiento. Lo que sí puede afirmarse claramente es que el juicio no respetó las normas constitucionales del debido proceso (CODEHUPY, 2012). Cabe aclarar que el Parlamento estaba compuesto en su mayoría por liberales y colorados. En otras oportunidades en que se quiso llevar adelante un juicio a Lugo los liberales lo frenaron, pero esta vez entregaron a la persona con la que asumieron el poder.

La hipótesis más fuerte en relación a este hecho es que fue premeditado: «Primero, perder el control del aparato del Estado y, segundo, entregar el control de este aparato a un presidente electo que no provenía del estamento político tradicional ni del grupo económico dominante surgido desde fuera de esos ámbitos, fueron hechos no asimilados por la clase política tradicional y por los grupos económicos» (Riquelme, 2014:41). Aunque con este gobierno la estructura socioeconómica permaneció intacta y los intereses dominantes no se tocaron (un ejemplo es la bajísima presión tributaria que sigue poseyendo el país), los grupos de poder sintieron la amenaza ante algunos cambios. Demostraron no estar dispuestos a ceder ni una porción ínfima de su poder, así como tampoco aceptar una integración mínima de los grupos más desfavorecidos.

Una vez destituido Lugo mediante el juicio parlamentario, asume el vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal. El área donde más atacó Franco fue justamente la agraria, allí donde Lugo casi ni intervino. Anunció una ley para permitir la venta de las tierras de la reforma a precio de mercado. El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) paralizó la mensura judicial de tierras en disputa; también se anunció la no intención de gravar con impuestos el sector de los agronegocios. Sumado a esto se aprobaron sin ningún tipo de control ni cumplimiento de normas legales una variedad de algodón y cuatro tipos de maíz transgénicos.

Con el gobierno anterior se había creado la resolución N° 1660/11, que intentaba reglamentar la Ley N° 3742 de aplicación de agroquímicos en plantaciones de soja. Franco derogó esta resolución y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal (SENAVE), cuyo presidente en ese momento era accionista de Pacific Agrosciences⁴, anunció una desregulación de las fumigaciones.

4 Empresa dedicada a la venta de agroquímicos.

En abril del año 2013 se llevaron a cabo las elecciones nacionales, que dieron como ganador a Horacio Cartes, del Partido Colorado, quien asumió en agosto. En solo tres meses de asumir el gobierno aprobó tres leyes anti-populares. La primera es la ley 5036/13 de Defensa Nacional y Seguridad interna, que consiste en la intervención de las fuerzas militares sobre asuntos de carácter interno, con el supuesto objetivo de combatir el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Se trata de la militarización de zonas donde la movilización campesina es más intensa, como los departamentos de Amambay, San Pedro y Concepción, y en la que trabajan de manera conjunta la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (SERPAJ, 2013).

La segunda ley es la de Alianza Público-Privada (APP), que implica la concesión de bienes, servicios y recursos públicos al sector privado, bajo la justificación de atraer inversiones extranjeras al sector público. De acuerdo a la normativa, la toma de decisiones en torno a las concesiones está a cargo exclusivamente del Poder Ejecutivo, dejando de lado la intervención del Congreso. Se produce una centralización del poder de gobierno, lo que le da mayor libertad de acción a Cartes.

Y por último, la ley de Adecuación Fiscal, que fue aprobada en el 2004 pero entra en vigencia recién el 1 de agosto de 2012. Esta ley reduce el impuesto a la renta de las empresas del 30% al 10%.

Con estas leyes, el gobierno actual deja en claro la dirección neoliberal a la que apunta, lo que conlleva una mayor concentración de la riqueza y el avance ininterrumpido del capitalismo agroindustrial. No puede pensarse la aprobación de la Ley de Alianza Público-Privada, sin la militarización de territorios con una fuerte presencia de organizaciones campesinas consolidadas como la FNC. Incluso de un Plan Sistemático de Ejecuciones de militantes campesinos, que tiene la finalidad política de desplazar a la población campesina de sus territorios a favor de los intereses ligados al agronegocio: «se articula entre terratenientes e intereses corporativos ligados a los agronegocios que, aliados con líderes políticos tradicionales, mantienen capturado al Estado, sirviéndose del mismo y utilizando sus medios de represión para perpetrar esos crímenes y garantizarse su impunidad» (Codehupy 2014:7).

Rearticulación ante la nueva coyuntura

Frente al giro hacia la derecha que conduce el nuevo gobierno y el amplio margen de acción que están teniendo los grupos de poder. ¿Qué rol juega el movimiento campesino?

Ya en octubre de 2013, luego de la aprobación de la ley de APP, entre 60 y 70 mil personas se movilizaron en todo el país. Por otro lado, el 26 de marzo de 2014 se produce la primera huelga general después de 18 años, donde organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, indígenas y campesinas se levantan frente a las políticas privatizadoras y represivas. Se realizan movilizaciones en el interior del país, cortes de ruta en 14 departamentos, un Festival Popular hacia la Huelga General y por la Libertad de los Presos de Curuguaty y más de 21 piquetes en Asunción y el Área Metropolitana. A todo esto, se suma la XXI Marcha del Campesinado Pobre de la FNC en Asunción. Se trató de la primera gran movilización y acción unitaria, desde las movilizaciones de resistencia al golpe parlamentario de 2012. Otra movilización importante fue la de los días 13, 14 y 15 de agosto, también convocada por organizaciones sociales y políticas.

En todas estas acciones participaron, agrupadas ya sea por sectores o afinidad política, el Partido Paraguay Pyahura (PPP), la Federación Nacional Campesina (FNC), la Corriente Sindical Clasista (CSC), la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Sindicato Nacional (OTEP SN), la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), Kuñá Pyrendá, 15 de Junio, el Frente Patriótico Popular, la Organización de Lucha por la Tierra, el Frente Guasu y otras organizaciones. Recurrentemente pudo observarse en estas movilizaciones que el PPP, la FNC, la CSC y la OTEP SN se movilizaron en conjunto, ya sea en esas marchas como en otras convocadas más recientemente. Por otro lado se encuentra la MCNOC compartiendo los mismos reclamos, pero sin organizar acciones de conjunto.

En este marco, la reciente reconstitución del Congreso Democrático del Pueblo no es un dato menor. En septiembre de 2014 se llevó a cabo la Plenaria Nacional hacia el Congreso Democrático del Pueblo, y en octubre se realizó en Caaguazú una Plenaria Departamental, donde se discutió un plan de lucha para los meses siguientes. El 1 de marzo de 2015 se presentó oficialmente como herramienta para enfrentar las políticas privatizadoras y represivas del nuevo gobierno, participando de este congreso organizaciones políticas y sociales como Partido Paraguay Pyahura (PPP), Federación Nacional Campesina (FNC), Kuñá Pyrendá, Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Sindicato Nacional (OTEP SN), Corriente Sindical Clasista (CSC), Frente Guasu, CONAMURI, Frente Patriótico Popular y otras. Otro hecho significativo fue la XXII Marcha del Campesinado Pobre, organizada también en mar-

zo por la FNC como todos los años, que fue apoyada por este congreso y acompañada por algunas organizaciones campesinas como CONAMURI y la Organización de Lucha por la Tierra (OLT).

Ante este nuevo escenario que se les presenta a las organizaciones, es difícil no remontarse a los antecedentes de este Congreso, que durante el año 2002 actuó para frenar las políticas privatizadoras del gobierno de González Macchi. En torno a esto, es interesante tener en cuenta qué circunstancias o factores impidieron que este Congreso perdure en el tiempo, hecho que tal vez hubiera posibilitado intervenir sobre transformaciones más profundas.

Por último, y como parte del análisis de esta coyuntura, se presentan ciertas incógnitas; entre ellas, es importante indagar de qué manera resuelven las diferencias ideológicas al interior del Congreso Democrático del Pueblo dos partidos políticos como el Frente Guasu y el Partido Paraguay Pyahurã o, dicho de otro modo, cómo el Congreso logra contener sus contradicciones. En el mismo sentido, es importante analizar si existe una disputa al interior y en ese caso, de qué características es la misma. Y junto a esto, cuál es el rol que están jugando las organizaciones campesinas. Por otro lado, podríamos preguntarnos si es posible que las organizaciones y partidos pongan en suspenso sus objetivos particulares, de forma que emerjan intereses compartidos en función de unificar fuerzas y pensar estrategias de conjunto.

Perspectivas futuras

Las movilizaciones y acciones llevadas a cabo por las organizaciones en general, denotan una activa oposición al gobierno actual. Más específicamente, varias son las organizaciones campesinas que han salido a la calle a protestar, encontrándose en las mismas jornadas de lucha. Esto permite pensar en la posibilidad de una articulación más permanente que exceda a la movilización, aunque ésta sea una importante herramienta de presión y participación política. De hecho, la conformación del Congreso Democrático del Pueblo es un indicador de la reorganización de fuerzas que están llevando adelante las organizaciones. Ya en otros momentos históricos se encontraron compartiendo espacios de discusión y acción, en contextos que reclamaban la unidad del campo popular. Un eje importante que permite echar luz sobre este contexto político es el grado de madurez en el que podría encontrarse hoy el movimiento campesino.

Otra cuestión a considerar es analizar profundamente a qué poder/es se enfrentan las organizaciones campesinas y qué contrapoder oponen a esto.

En este sentido, caracterizar el gobierno de Cartes es un punto importante, ya que presenta claramente facetas neoliberales, pero puede estar hablándose de un gobierno de nuevo tipo.

Por otro lado, habría que indagar en las causas que hacen a la existencia de varias coordinadoras donde las organizaciones se encuentran dispersas, lo cual se presenta como una desventaja a la hora de oponerse al sistema hegemónico.

Por último, es interesante pensar en los movimientos campesinos partiendo de una potencial disputa al poder dominante, en tanto representan una alternativa al modelo de agricultura industrial capitalista, luchando por la permanencia de un modelo de agricultura familiar donde la relación con el territorio es diferente. Al mismo tiempo, desafían las relaciones de poder vigentes al plantear una estructura de la posesión de la tierra más igualitaria, la importancia de un Estado que tenga como objetivo lograr la soberanía sobre su territorio y plantee un modelo de desarrollo nacional y autónomo. Incluso sostienen un tipo de democracia que define a la ciudadanía en función del goce de una multiplicidad de derechos. Pero también se percibe la intención de construir formas más igualitarias de relaciones entre géneros, ya sea con un mayor protagonismo de las mujeres dentro de las organizaciones como en el campo político en sí. En el espacio público se observa la presencia de varias referentes de las organizaciones, así como espacios conformados exclusivamente por mujeres, como CONAMURI o Kuñá Pyrendá. Quedaría por rastrear si existen otros ámbitos donde los movimientos campesinos apuesten a deconstruir el patriarcado.

Referencias bibliográficas

- Alderete, A. (2005), El problema de la tierra en Paraguay (memo).
- Bareiro Ibarra, M. (2011), La práctica plena de este derecho, una realidad todavía pendiente. En: *Yvypóra Derécho Paraguáipe 2011 – Derechos Humanos en Paraguay*. CODEHUPY, Asunción (pp. 273-282).
- Boccia Paz, A. (2012), Análisis de coyuntura. El año de la ruptura. En: *Yvypóra Derécho Paraguáipe 2012 – Derechos Humanos en Paraguay*. CODEHUPY, Asunción (pp. 21-49).
- Carbone R. y Soto C. (editores, 2014), *Curuguay: pueblo mba'ê*. Arandurã, Asunción.
- CODEHUPY (2007); «Informe Chokokue 1989-2005. Ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en el Paraguay».
- CODEHUPY (2014); «Informe Chokokue 1989-2013. El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino».

- Domínguez Diego; Sabatino Pablo (2005), «La muerte que viene en el viento. La problemática de la contaminación por efecto de la agricultura transgénica en Argentina y Paraguay». *Los señores de la soja: la agricultura transgénica en América Latina*. CLACSO. Buenos Aires.
- Fogel R. (2006), «Movimientos campesinos y su orientación democrática en el Paraguay». *La construcción de la democracia en el campo latinoamericano*. Grammont, Hubert. CLACSO. Buenos Aires.
- Fogel, R. (2012), El Movimiento de los Carperos. En: Novapolis. Revista de estudios políticos contemporáneos. Ed. N° 5 ABR-OCT 2012 (pp. 11-30).
- López, M. (2014), ¿Qué más se puede decir de la democracia? Curuguaty bajo el prisma de la crítica democrática. En Carbone R. & Soto C. (Eds.) Curuguaty: Pueblo mba'e (pp. 123-133). Asunción, Paraguay.
- Palau M. y Ortega, G. (2008), Paraguay: el nuevo escenario de disputa de los intereses populares.
- Palau, T. (2003), «Políticas agrarias en el Paraguay. Instrumentos de discriminación». En Novapolis. Revista de estudios políticos contemporáneos, Ed. N° 2. Febrero de 2003.
- Palau, T. (2005), «El movimiento campesino en el Paraguay: conflictos, planteamientos y desafíos». *OSAL, Observatorio Social de América Latina*. CLACSO. N° 16 ENE-ABR 2005.
- Riquelme, Q. (2014), Masacre de Curuguaty, corolario de siglo y medio de lucha por la tierra. En SERPAJ PY (2013), «Resistencia campesina ante los abusos de poder. Informe de allanamientos, detenciones y desalojos en los primeros tres meses de gobierno del presidente Horacio Cartes». Asunción.
- Vera, E., Riquelme, Q. (2011), Cuenta regresiva para Lugo y la reforma agraria. Reforma agraria y desarrollo rural. En: *Yvypóra Derecho Paraguáipe 2011 – Derechos Humanos en Paraguay*. CODEHUPY, Asunción (pp. 265-272).